

La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la grabación con medios audiovisuales de las Asambleas que celebre la Federación deportiva a que pertenece.

Con carácter general, debe indicarse que los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, extienden su protección a los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere al tratamiento de sus datos de carácter personal, siendo definidos éstos en el artículo 3.a) de la citada Ley como *“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”*

Por su parte, el artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, precisa que constituye un dato de carácter personal *“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”*

La citada Ley Orgánica configura, asimismo, el tratamiento de datos de carácter personal en su artículo 3.c) como aquellas *“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”*.

De acuerdo con las definiciones expuestas, la grabación de las reuniones de la Asamblea de la Federación a la que pertenece el consultante, constituye una actividad sometida a la Ley Orgánica 15/1999, por lo que dicho tratamiento debe cumplir con los requisitos previstos en dicha norma.

A este respecto, debe tomarse en consideración, en primer término que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional ha configurado el derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental autónomo, diferenciado del derecho fundamental a la intimidad (STC 292/2000), determinando su contenido esencial al proclamar que *“De todo lo dicho resulta que el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la*

*facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.”*

Por consiguiente, siendo el derecho a la protección de datos personales un derecho fundamental, la primera cuestión que plantea el presente supuesto es la de la proporcionalidad en el tratamiento de datos a que se refiere la consulta.

El artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, consagra el principio de proporcionalidad en el tratamiento de los datos, estableciendo que *“los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”*. De ello se desprende la necesidad de que el tratamiento de un determinado dato de carácter personal, (como sería, en este caso, la imagen y voz de los afectados), deba ser proporcionado a la finalidad que lo motiva.

Respecto de la proporcionalidad ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 207/1996 se trata de *“una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el curso de un proceso penal viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.*

*En este sentido, hemos destacado que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: «si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”*.

De este modo, si dicha finalidad pudiera ser conseguida por la realización de una actividad distinta al citado tratamiento, sin que dicha

finalidad sea alterada o perjudicada, debería optarse por esa última actividad, dado que el tratamiento de los datos de carácter personal supone, tal y como consagra nuestro Tribunal Constitucional, en Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, una limitación del derecho de la persona a disponer de la información referida a la misma.

En el caso que nos ocupa, no se especifica la finalidad de la grabación a que se refiere la consulta, por lo que no cabe dar una respuesta terminante a la cuestión relativa a la adecuación de dicha medida a la finalidad perseguida. No obstante, debe señalarse que en el caso de que dicha finalidad fuera la de la sustitución de las actas de la reunión de la Asamblea, no corresponde a esta Agencia determinar la validez en derecho de las grabaciones sustitutivas de las preceptivas actas de las reuniones de los órganos de la Federación, si bien resulta obvio que, si la grabación no constituye un instrumento apto para conseguir esta finalidad, la medida resultaría desproporcionada.

En todo caso, aún cuando dicho tratamiento responda al principio de proporcionalidad, debe someterse a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, que impone al responsable del fichero, en el presente supuesto la Federación a que pertenece el consultante, entre otras, las obligaciones de obtener el consentimiento del interesado para el tratamiento o cesión de los datos y la de informarle sobre los derechos que le asisten, así como sobre la identidad y dirección del responsable y sobre el uso que se va a dar a esos datos.

Dispone a este respecto, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, *“El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”*. Este consentimiento deberá ser, conforme a lo dispuesto en su artículo 3 h) *“libre, inequívoco, específico e informado”*, debiendo en consecuencia aparecer vinculado a las finalidades determinadas, específicas y legítimas que justifican el tratamiento de los datos, siendo así que los datos únicamente podrían ser tratados en el ámbito de las mencionadas finalidades, tal y como dispone el artículo 4.1 de la misma norma, no pudiendo ser tratados para fines incompatibles con aquéllas (artículo 4.2 de misma Ley).

No obstante, el número segundo del artículo 6 de la Ley 15/1999, prevé una serie de excepciones a la necesidad de consentimiento para el tratamiento de datos personales, disponiendo al efecto que *“no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7 apartado 6 de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la*

*satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.*

De esta manera, el tratamiento a que se refiere la consulta requerirá el consentimiento de los interesados, salvo en el supuesto de que dicho tratamiento conste en los estatutos de la Federación ya que, como tiene señalado reiteradamente esta Agencia, el asociado por el hecho de adquirir tal condición debe conocerlos y aceptarlos, de modo que será posible considerar que su incorporación a la asociación implica la creación de una relación jurídica entre aquél y ésta, cuyos términos serán fijados por los propios Estatutos. De este modo, el uso de los datos derivado de tal relación quedará delimitado por la finalidad que se haya previsto a tal efecto en los Estatutos.